

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO

Barrancabermeja, octubre veinticinco (25) de dos mil veintiuno (2021)

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el Juzgado a resolver la impugnación interpuesta por la señora CHARLOTH YANINE MOGOLLON SANCHEZ contra el fallo de tutela fechado 10 de septiembre de 2021, proferido por el JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA, dentro de la acción de tutela interpuesta en contra de DISTRITO DE BARRANCABERMEJA –SECRETARIA DE HACIENDA- y el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI.

ANTECEDENTES

CHARLOTH YANINE MOGOLLON SANCHEZ, impetra la protección de su derecho fundamental de petición, solicitando se ordene a los accionados procedan a dar respuesta a la petición elevada el 29 de abril de 2021.

Como hechos sustentarios del petitum manifiesta que:

“1) Mediante Escritura Pública No. 1450 de fecha 17 de julio de 2018, ALIANZA FIDUCIARIA S.A. constituyó la urbanización, división material y cesión de bienes del bien inmueble denominado como LOTE NÚMERO 2 con extensión de 109.020.28 M2, identificado con Matricula inmobiliaria No. 303- 86437, y número de predio 010602500005000 ubicado en el municipio de Barrancabermeja, Santander.

2) Como se señaló dentro del acto referenciado, se solicitó la subdivisión del predio en los siguientes términos: 1. Lote A, con un área de 36.095.52 M2. 2. Lote B, con un área de 22.689.94 M2. 3. Lote C, con un área de 23.660.87 M2. 4. Lote D, con un área de 23.595.17 M2. 5. Lote cesión tipo A con un área de 2.979.25 M2.

3) En consecuencia, se abrieron los siguientes folios de matrículas inmobiliarias: 1. Lote A, con un área de 36.095.52 M2. Folio de Matricula inmobiliaria No. 303-96301 2. Lote B, con un área de 22.689.94 M2. Folio de Matricula inmobiliaria No. 303-96302 3. Lote C, con un área de 23.660.87 M2. Folio de Matricula inmobiliaria No. 303-96303 4. Lote D, con un área de 23.595.17 M2. Folio de Matricula inmobiliaria No. 303-96304 5. Lote cesión tipo A con un área de 2.979.25 M2. Folio de Matricula inmobiliaria No. 303-96305

4) El municipio de Barrancabermeja está realizando cobro persuasivo a la ALIANZA FIDUCIARIA S.A. administradora del patrimonio autónomo FIDEICOMISO LA ESTACIÓN sobre Impuesto Predial de las vigencias 2019, 2020 y 2021 sobre el predio de gran extensión, esto es, LOTE NÚMERO 2 con extensión de 109.020.28 M2, identificado con Matricula inmobiliaria No. 303-86437, y número de predio 010602500005000, obviando que se realizó subdivisión del predio, es decir, sin tener en cuenta la realidad física, jurídica y económica a la fecha de los bienes. Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Accionante: CHARLOTH YANINE MOGOLLÓN SÁNCHEZ Accionado: Alcaldía de Barrancabermeja, Secretaría de Hacienda y Tesoro Distrital e, Instituto Geográfico Agustín Codazzi – Dirección Territorial Santander. Derechos fundamentales vulnerados: DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN

5) De forma verbal se le explicó a la SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORO DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA que se estaba realizando el cobro de forma errónea, y adicionalmente, se solicitó se realizara la corrección conforme al contenido de la Escritura Publica No. 1450 de fecha 17 de julio de 2018, para que, conforme a lo estipulado allí, la liquidación del impuesto predial de los años 2019, 2020 y 2021 estuviera ajustada en derecho y se pudiera pagar, sin embargo, no se obtuvo solución, de modo que, se optó por elevar derecho de petición, al IGAC y a la SECRETARÍA DE HACIENDA para que las entidades emitieran respuesta por escrito, para lo cual ALIANZA FIDUCIARIA, bajo designación de Holding Valencia S.A.S. me otorgaron autorización para la consecuente radicación de los correspondientes derechos de petición.

6) Por lo expuesto el día 29 de abril de 2021, se elevó derecho de petición INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI - DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, solicitando el desenglobe catastral de los predios relacionados, para que, una vez estuviera actualizada la información se procediera a la correcta liquidación y pago del correspondiente impuesto predial, derecho de petición enrutado bajo el Radicado No. 2100-2021-0006268-ER-000.

7) Subsiguientemente el mismo 29 de abril de 2021 ante la SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORO DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA mediante el canal habilitado, correo electrónico, contactenos@barrancabermeja.gov.co se elevó también derecho de petición junto con las pruebas correspondientes, informando la situación descrita y solicitando se abstuviera de continuar con el trámite de cobro persuasivo, se realizara la actualización y revisión de la liquidación del impuesto predial, condonación del crédito y/o acuerdo de pago, a esta petición el mismo día Cecilia Marín Pérez funcionaria encargada de la correspondencia, indicó que la misma había sido enrutada por competencia funcional a la Secretaría de Hacienda al correo electrónico juan.ariza@barrancabermeja.gov.co.

8) A la fecha, ni el INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI - DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, ni la SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORO DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA han dado respuesta alguna a las peticiones elevadas o han realizado las correcciones del caso, cuyo término aun contando la ampliación del mismo, con ocasión al estado de emergencia decretado por el gobierno central feneció el 15 de junio de 2021, contrario sensu han estado notificando requerimientos de cobro persuasivo sin fundamento y sin tenerse en cuenta los trámites en cita.

9) Su señoría, acudir a este trámite es la única herramienta jurídica eficaz e idónea con que a la fecha se cuenta, para lograr que el INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI -

DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, y SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORO DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA de una respuesta íntegra a la solicitud elevada, se cese con la vulneración del derecho de petición y se garantice el acceso efectivo al mismo y a los demás derechos que las entidades con su negativa estarían infringiendo, además de los perjuicios económicos, ya que, hay intereses moratorios de por medio en la obligación adeudada con el municipio.

10) La presente acción de tutela se presenta conjuntamente contra el INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI - DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, y SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORO DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, por económica procesal, toda vez que, aunque se traten de dos peticiones distintas, están relacionadas porque se dirigen a una misma finalidad, y el que ninguna entidad haya realizado pronunciamiento en término vulnera mis derechos.

TRAMITE

Por medio de auto de fecha 2 de septiembre de 2021, el Juzgado Quinto Civil Municipal de Barrancabermeja, dispuso admitir la presente acción tutelar contra DISTRITO DE BARRANCABERMEJA – SECRETARIA DE HACIENDA - e INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI.

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA – SECRETARIA DE HACIENDA - e INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI, contestaron dentro del término de Ley, respuestas que se encuentran insertas dentro del expediente tutelar.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Cumplido el trámite legal, en sentencia de septiembre 10 de 2021, el **JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**, resolvió NO CONCEDER por CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO la protección reclamada en esta acción constitucional por CHARLOTH YANINE MOGOLLON SANCHEZ.

Indica la *a quo* que de la respuesta emitida por las entidades accionadas, se logró establecer que se emitió una respuesta de fondo a las mismas, y fueron puestas en conocimiento de la actora a través de correo electrónico, por lo anterior se concreta con ello, la carencia actual de objeto por hecho superado.

IMPUGNACIÓN

CHARLOTH YANINE MOGOLLON SANCHEZ, impugno el fallo de tutela aduciendo que los fundamentos fácticos de la presente impugnación giran en torno a una contestación vaga y retrasada injustificadamente por parte de las entidades accionadas, que resuelve en poco o nada la petición realizada, lo cual no termina por ser razonable siempre que son estas y no otras, las autoridades competentes, tratándose en materia predial, para resolver de fondo. En consecuencia, el Despacho pasó por alto las disposiciones jurídicas en materia de TUTELA y del derecho fundamental de PETICIÓN, desarrolladas por el legislador y la Honorable Corte Constitucional.

CONSIDERACIONES

1.- Este despacho es competente para conocer en segunda instancia de la presente acción de tutela de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991.

2.- Tiene establecido la jurisprudencia constitucional que la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política, es un instrumento procesal complementario, específico y directo que tiene por objeto la protección concreta e inmediata de los derechos fundamentales en una determinada situación jurídica, cuando estos sean violados o presenten amenaza de violación.

Este mecanismo constitucional, preferente y sumario está instituido en el art. 86 de la Carta Magna, reglado por los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, así como orientado por la jurisprudencia constitucional.

3.- La ley 1755 de 2015 (por medio de la cual sustituye los artículos 13 al 33 de la Ley 1437 de 2011), dispone en sus artículos 13 y 14 lo siguiente:

“Artículo 13. Objeto y Modalidades del Derecho de Petición ante Autoridades. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este Código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación

a través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación.

Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. *Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:*

1. *Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.*

2. *Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades ' en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto."*

En conclusión, el derecho fundamental de petición consiste no sólo en el derecho de obtener una respuesta por parte de las autoridades sino a que éstas resuelvan de fondo, de manera clara y precisa la petición presentada.

4.- Respecto al derecho de petición la Honorable Corte Constitucional, se ha referido en sentencia T-630 de 2002 así:

"En relación con el derecho de petición, es abundante la jurisprudencia de la Corte Constitucional¹. En la sentencia T-377 de 2000 se establecieron estos parámetros.

a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

*c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, en forma clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. **La respuesta debe ser puesta en conocimiento del peticionario.** Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.*

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.

¹ Pueden consultarse las sentencias T-12 de 1992, T-419 de 1992, T-172 de 1993, T-306 de 1993, T-335 de 1993, T-571 de 1993, T-279 de 1994, T-414 de 1995, T-529 de 1995, T-604 de 1995, T-614 de 1995, SU-166 de 1999, T-307 de 1999, entre muchas otras.

e) *Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.*

f) *La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera en igual forma como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente.*

g). *En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordena responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.*

h) *La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición.*

i) *El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994.*

4.1. Frente al ejercicio del derecho fundamental de petición, ejercido ante particulares, ha expresado la Honorable Corte Constitucional, en Sentencia T-183/11, que:

“En reiteradas ocasiones se ha expuesto que el núcleo esencial del derecho de petición, reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión solicitada que debe darse en un tiempo razonable, y que debe ser comunicada al peticionario.

Es importante recordar, que la satisfacción plena del derecho de petición supone la configuración de dos circunstancias a saber: (i) la presentación de la solicitud y (ii) la resolución de la misma, respecto a este segundo momento que es la respuesta, se ha dicho ya en reiteradas ocasiones que la comunicación de lo decidido por el peticionario debe ser pronta y efectiva, sin importar la favorabilidad o no de la misma. (subrayado fuera de texto).”

4.2. Posteriormente, la Alta Corporación añadió dos reglas adicionales: (i) que la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no exonera a la entidad del deber de responder; y (ii) que la respuesta que se profiera debe ser notificada al interesado.²

4.3. Igualmente en sentencia T-094 de 2016 señaló:

*El derecho de petición puede ser interpuesto ante particulares y autoridades públicas, la importancia respecto de éstas últimas radica en que a través de éste, se coloca a la administración en funcionamiento, se exige el goce de distintas prerrogativas y se accede a la información, es por esta razón, que dentro de sus garantías se encuentran (i) la pronta resolución del mismo, es decir que, la respuesta debe entregarse dentro del término legalmente establecido para ello y, (ii) **la contestación debe ser clara y efectiva respecto de lo pedido, de tal manera que, permita al peticionario conocer la situación real de lo solicitado.** Sobre el tema existe abundante jurisprudencia, en la que esta Corte ha definido los conceptos básicos y mínimos que componen este derecho, así como su núcleo esencial; sobre éste último aspecto ha manifestado que el mismo radica en la resolución integral de la solicitud, de manera que se atienda lo pedido, sin que ello signifique que la solución tenga que ser positiva. Al respecto, esta Corporación ha dicho que:*

“... una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario es efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea; y es congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución a lo pedido verse sobre lo preguntado y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre relacionada con la petición propuesta.”

*En otras palabras, el goce efectivo del derecho de petición implica que exista una **contestación que resuelva efectivamente lo pedido, sin que implique que la respuesta corresponda a lo solicitado, puesto que la misma puede ser negativa siempre que sean claras las razones por las cuales no se accede a lo peticionado, dicho de otra manera, no puede ser evasiva o abstracta.** De la misma forma, el núcleo esencial del derecho fundamental en comento, requiere que la respuesta sea oportuna, por lo que debe encontrarse dentro del término legalmente establecido para ello.” (subrayado y negrilla fuera de texto).*

Por lo anterior, la efectividad del derecho fundamental de petición se deriva de una respuesta pronta, clara y completa por parte de la entidad a la que va dirigida. La falta de alguna de estas características se materializa en la vulneración de esta garantía constitucional.

5.- Respecto a la carencia actual del objeto la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-146/12, dice:

“Esta Corporación ha considerado que cuando hay carencia de objeto, la protección a través de la tutela pierde sentido y, en consecuencia, el juez de tutela queda

² T-173 de 2013.

imposibilitado para emitir orden alguna de protección del derecho fundamental invocado.

En la Sentencia T-988/02, la Corte manifestó que“(...) si la situación de hecho que origina la violación o la amenaza ya ha sido superada en el sentido de que la pretensión erigida en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha, la acción de tutela pierde eficacia y por lo tanto razón de ser.”

En este orden de ideas, se ha entendido que la decisión del juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, se encuentra que la situación expuesta en la demanda, que había dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acción, ha cesado, desapareciendo así toda posibilidad de amenaza o daño a los derechos fundamentales.

De este modo, se entiende por hecho superado la situación que se presenta cuando, durante el trámite de la acción de tutela o de su revisión en esta Corte, sobreviene la ocurrencia de hechos que demuestran que la vulneración de los derechos fundamentales, en principio informada a través de la instauración de la acción de tutela, ha cesado.”

5.1. Así mismo el derecho de petición, solo se satisface cuando la persona que elevó la solicitud conoce la respuesta del mismo. Significa que ante la presentación de una petición, la entidad debe notificar la respuesta al interesado.

5.2. Cabe recordar que el derecho de petición, se concreta en dos momentos sucesivos, ambos subordinados a la actividad administrativa del servidor que conozca de aquél. En primer lugar, se encuentra la recepción y trámite de la petición, que supone el contacto del ciudadano con la entidad que, en principio, examinará su solicitud y seguidamente, el momento de la respuesta, cuyo significado supera la simple adopción de una decisión para llevarla a conocimiento directo e informado del solicitante.

De este segundo momento, emerge para la administración un mandato explícito de notificación, que implica el agotamiento de los medios disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello.

5.3. Sobre la obligación y el carácter de la notificación, debe precisarse en primer lugar, que ésta debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante. Esta característica esencial, implica además que la responsabilidad de la notificación se encuentra en cabeza de la administración, esto es, que el ente al cual se dirige el derecho de petición está en la obligación de velar porque la forma en que se surta aquella sea cierta y seria, de tal manera que logre siempre una constancia de ello.

5.4. La constancia que logre obtener la entidad de la notificación de su respuesta al peticionario, constituye la prueba sobre la comunicación real y efectiva que exige la jurisprudencia para perfeccionar el núcleo esencial del derecho de petición, desde luego, siempre que la respuesta se ajuste a las exigencias del peticionario.

6. Visto lo anterior, se avizora la improcedencia del amparo, en virtud a que los accionados para la fecha del fallo de primer grado, así como para la hora de ahora no han vulnerado derecho de petición fundamental alguno, pues en sus contestaciones allegaron las respuesta emitidas el 2 y 3 de septiembre hogaño en cumplimiento a lo peticionado por la accionante

7. Ahora que ésta respuesta sea favorable o no a los intereses de la actora, es un aspecto que escapa de la competencia de las acciones constitucionales. Así lo dejó sentado la Honorable Corte Constitucional en sentencia T 463 del 2011, cuando expuso:

*“El derecho de petición se materializa cuando la autoridad requerida, o el particular en los eventos en que procede, emite respuesta a lo pedido, i) respetando el término previsto para tal efecto; ii) de fondo, esto es, que resuelva la cuestión, **sea de manera favorable o desfavorable a los intereses del peticionario**; iii) en forma congruente **frente a** la petición elevada; y, iv) **comunicándole tal contestación al solicitante**. Si emitida la respuesta por el requerido, falla alguno de los tres presupuestos finales, se entenderá que la petición no ha sido atendida, conculcándose el derecho fundamental”.* (Negrilla y subrayado fuera de texto).

9. Así las cosas, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto a que la decisión que pudiese adoptar el Juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción.

En ese orden de ideas, se confirmará el fallo de tutela de fecha 10 de septiembre de 2021 proferido por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Barrancabermeja.

10. Ahora, como quiera que la sentencia proferida el 10 de septiembre de 2021 notificada en el término, esto es septiembre 13 hogaño, e impugnada dentro de la oportunidad se pasó al despacho solo hasta el día **28 de ese mes y año** para conceder la impugnación, superando los términos señalados en el artículo 32 del

Decreto 2591, se advierte que la secretaría de ese despacho judicial no está cumpliendo con los términos que dispone la norma citada, razón por la que se exhorta a la Titular del despacho, para que tome las medidas disciplinarias a que hubiere lugar

Por lo expuesto, el **JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANCABERMEJA**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de fecha 10 de Septiembre de 2021, proferido por el JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE BARRANCABERMJA, dentro de la acción de tutela impetrada por **CHARLOTH YANINE MOGOLLON SANCHEZ** contra el **DISTRITO DE BARRANCABERMEJA –SECRETARIA DE HACIENDA-** y el **INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI** por lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: SE EXHORTA a la Titular del Despacho, para que tome las medidas disciplinarias, a que hubiere lugar, toda vez que la Secretaría del Juzgado Quinto Civil Municipal de Barrancabermeja, no está cumpliendo con los términos que dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, respecto a la remisión del expediente para el trámite de la impugnación.

TERCERO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes comprendidas en este asunto, conforme a lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1.991 y comuníquese la decisión a la Oficina Judicial de primer grado.

CUARTO: OPORTUNAMENTE envíese el expediente a la Honorable Corte Constitucional, para una eventual revisión de la sentencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

CESAR TULIO MARTINEZ CENTENO
JUEZ

SENTENCIA: ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA
RAD. 1ª. NO. 2021-00515-00
RAD. 2ª. NO. 2021-00515-01
ACCIONANTE: CHARLOTH YANINE MOGOLLON SANCHEZ
ACCIONADO: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SECRETARIA DE HACIENDA- Y EL IGAC

Firmado Por:

Cesar Tulio Martinez Centeno

Juez

Juzgado De Circuito

Civil 002

Barrancabermeja - Santander

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

111d3b02d716986f424a331ad265e3c192fdbc0771b3ed2df6b369c6b76ec542

Documento generado en 25/10/2021 12:48:04 p. m.

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>